

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

EJECUTANTE	PAULA ANDREA VELARDE JARAMILLO
EJECUTADA	FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACIÓN CONCIVICA - FUNDACIÓN COLOMBIA CIVICA
RADICADO UNICO NACIONAL	05001310501020230023601
TIPO DE PROCESO	EJECUTIVO
DECISIÓN	CONFIRMA
ACTA DE DECISIÓN	333 de 2023

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por la parte Ejecutante en contra del auto del 26 de julio de 2023 que negó el mandamiento de pago por los intereses moratorios del artículo 1617 del C.C.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Mediante escrito del 14/07/2023 (anexo 67) la parte Ejecutante solicita se libre mandamiento de pago por la suma de \$78.356.130 por concepto de salarios, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones y la indemnización del artículo 26 de la ley 361/1997 por el despido comprendido entre el 19/03/2015 y el 13/09/2017; por los aportes a la seguridad social en pensiones por los periodos comprendidos entre el 19/03/2015 y el 13/09/2017; la suma de \$7.835.613 por concepto de costas procesales; y los intereses moratorios del artículo 1617 del C.C desde el momento que se libre el mandamiento de pago y hasta el pago real y efectivo de la obligación; y las costas y agencias en derecho del proceso Ejecutivo.

El Juzgado mediante Auto del 26 de julio de 2023 (anexo 69) libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

RESUELVE

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO, por vía Ejecutiva Laboral, a favor de **PAULA ANDREA VELARDE JARAMILLO**, en contra del **FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CONCIVICA - FUNDACION COLOMBIA CIVICA**, por lo siguientes valores:

- Por **\$55.251.333** por concepto de salarios.
- Por **\$5.078.664** por concepto de cesantías e intereses a las cesantías.
- Por **\$2.304.711** por vacaciones.
- Por **\$4.609.422** por primas de servicio, por los años 2015 al 2017.
- Por **\$11.112.000** por la sanción establecida en el art. 26 de la Ley 361 de 1997 (180 días de salario).
- Por **\$7.835.613** por las costas del proceso ordinario.
- Por la **obligación de hacer**, de consignar en el fondo de pensiones AFP PROTECCION S.A., los aportes correspondientes a los periodos en los que no efectuó cotizaciones, comprendidos entre el 19 de marzo de 2015 y el 13 de septiembre de 2017, lo que implica que el ejecutado deba realizar los trámites que correspondan frente a tal fondo en plazo no mayor a 30 días, contado a partir de la notificación de esta providencia.

SEGUNDO: COSTAS del proceso ejecutivo a cargo de la ejecutada, las cuales se resolverán en la etapa procesal pertinente.

TERCERO: NOTIFICAR personalmente a **FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CONCIVICA - FUNDACION COLOMBIA CIVICA**, en los términos de ley, advirtiéndoles que dispone de un término de cinco (5) días para hacer el pago y diez (10) días para proponer excepciones, contados a partir de los dos días siguientes a la fecha en que se surta la notificación, de conformidad con lo previsto en lo previsto en el parágrafo del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, modificado por el artículo 20 de la ley 712 de 2001, y la Ley 2213 de 2022.

CUARTO: DECRETAR el embargo del bien inmueble ubicado en la ciudad de Armenia Quindío, con dirección Avenida Bolívar N° 35-30, identificado con matrícula inmobiliaria 280 -26807, para lo cual se librará oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia Quindío.

QUINTO: OFICIAR a **CIFIN – TRANSUNION**, para que certifique si la ejecutada posee en la actualidad productos en cualquier entidad bancaria de Colombia.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones, por lo manifestado en la considerativa.

SEPTIMO: RECONOCER personería para actuar a la abogada **KATERINE MARIN OROZCO** portadora de la **T.P. 255.550 del C.S. de la J.**, como apoderada de la parte ejecutante, en los términos del poder conferido, conforme los presupuestos del art. 74 del C.G.P.

Negando el mandamiento de pago respecto de los intereses moratorios del artículo 1617 del C.C al argumentar:

Solicita la parte, que se libre mandamiento por los intereses moratorios del art. 1617 del C.C. sobre las condenas del proceso ordinario, pretensión que se despachará desfavorablemente, ya que no hay título para esta pretensión, pues en la sentencia, como medio resarcitorio, solo se tuvo en cuenta la

indemnización por el despido del trabajador en estado de debilidad manifiesta y frente a este si hay título ejecutivo.

RECURSO DE APELACIÓN PARTE EJECUTANTE

Afirma que no le asiste razón al *a quo* cuando niega el mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios puesto que por el solo hecho del pago tardío o no pago de las condenas impuestas en el proceso Ordinario laboral, se genera un

detrimento patrimonial y surge el título base de recaudo por incumplimiento del deudor causándose así los respectivos intereses moratorios del artículo 1617 del C.C.

Que las sentencias judiciales son un título ejecutivo complejo porque luego de emitidas y de estar debidamente ejecutoriadas dicho capital es susceptible de generar intereses moratorios si no se paga en la fecha oportuna, sin que se pueda entender lo contrario, pues aceptar dicha posición sería premiar la actitud omisiva de la demandada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Sea lo primero indicar que, aunque la parte ejecutante de una forma no muy ortodoxa alude en esta sede a “sustentación del recurso de apelación” de conformidad con el debido proceso, en aras de proteger derechos fundamentales y de conformidad con una interpretación amplia entenderá para todos los efectos que el mismo corresponde a los alegatos de conclusión en esta instancia, y más cuando dicho documento fue presentado dentro del término de traslado.

La parte ejecutante reitera los argumentos expuestos en su recurso de apelación, y agrega que, no se puede equiparar como lo pretende el *a quo*, la sanción contenido en el artículo 26 de la ley 361 de 1997 con los intereses moratorios del artículo 1617 del C.C pues este último procede por el no pago oportuno de una suma adeudada; es decir, que todo capital que no es pagado en la fecha de su exigibilidad genera automáticamente intereses por su no pago.

COMPETENCIA

Principio de Consonancia art. 66A del C.P. T. y S.S., adicionado, artículo 35 de la Ley 712 de 2001.

PROBLEMA JURÍDICO

Determinar si resulta procedente librar mandamiento de pago respecto a los intereses del artículo 1617 del Código Civil sobre las sumas impuestas en el proceso Ordinario Laboral que dio origen al presente proceso ejecutivo, o si, por el contrario, no obra título ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa y exigible respecto a tal concepto.

CONSIDERACIONES

De cara a lo anterior debe indicarse que conforme al inciso primero del artículo 100 del CPT y de la S.S. *“Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme”*.

Así mismo, según el artículo 422 del CGP¹, aplicable por analogía al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPT y de la S.S., el acreedor puede demandar por la vía ejecutiva las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que procedan del deudor o de su causante, y sean plena prueba contra este. Dichos documentos se clasifican como títulos ejecutivos, los cuales debe probar la existencia de una prestación en beneficio de un sujeto. Esto es, el deudor está obligado frente a su acreedor a ejecutar una conducta de dar, hacer o de no hacer de manera clara, expresa y actualmente exigible.

Frente a las condiciones sustanciales que debe reunir el título ejecutivo, indicó la Corte Constitucional en Sentencia T-747 del 2013, que es clara la obligación cuando están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y

¹ ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo [184](#).

los factores que la determinan, es expresa cuando la obligación es nítida y manifiesta en la redacción del documento, y es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición. Así mismo, frente a los requisitos impuestos a los títulos ejecutivos consignados en el artículo 422 del CGP, en la sentencia STC3298-2019, Radicación n.º 25000-22-13-000-2019-00018-01 del 14 de marzo de 2019, indicó la Sala de Casación Civil de la CSJ lo siguiente:

“La claridad de la obligación, consiste en que el documento que la contenga sea inteligible, inequívoco y sin confusión en el contenido y alcance obligacional de manera que no sea oscuro con relación al crédito a favor del acreedor y la deuda respecto del deudor. Que los elementos de la obligación, sustancialmente se encuentren presentes: Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico. Tanto el préstamo a favor del sujeto activo, así como la acreencia en contra y a cargo del sujeto pasivo.

La expresividad, como característica adicional, significa que la obligación debe ser explícita, no implícita ni presunta, salvo en la confesión presunta de las preguntas asertivas. No se trata de que no haya necesidad de realizar argumentaciones densas o rebuscadas para hallar la obligación, por cuanto lo meramente indicativo o implícito o tácito al repugnar con lo expreso no puede ser exigido ejecutivamente. Tampoco de suposiciones o de formulación de teorías o hipótesis para hallar el título. Y es exigible en cuanto la obligación es pura y simple o de plazo vencido o de condición cumplida.”.

Así pues, respecto del contenido semántico que le es propio a cada uno de estos términos se advierte lo siguiente²:

a. Que la obligación sea clara: consiste en que sus elementos aparezcan inequívocamente señalados; tanto su objeto (obligación real o personal), como sus sujetos (acreedor y deudor), además de la descripción de la manera como se ha de llevar a cabo la prestación (plazo o condición), presupuesto sin el cual no sería posible determinar con la certeza requerida el momento de su exigibilidad y la verificación de un eventual incumplimiento.

b. Que la obligación sea expresa: quiere decir que se encuentre debidamente determinada, especificada y patentada en el documento ejecutivo. Esta determinación, por tanto, solamente es posible hacerse por escrito. En otras

² Según la doctrina (Juan Guillermo Velásquez “De los procesos ejecutivos”)

palabras, este requisito se cumple cuando los elementos constitutivos de una obligación que se pueda llamar clara se hacen constar por escrito en un instrumento que servirá de prueba inequívoca de la existencia de una obligación.

c. Que la obligación sea exigible: Significa que únicamente es ejecutable la obligación pura y simple, o, que habiendo estado sujeta a plazo o a condición suspensiva, se haya vencido aquel o cumplido ésta, sea por mandato legal o por acuerdo entre las partes contractuales.

CASO CONCRETO

En el auto recurrido se ordenó librar mandamiento de pago frente a las sumas objeto de condena en el proceso Ordinario, pero negando los intereses legales moratorios del artículo 1617 C.C. sobre las sumas insolutas de la condena, desde su exigibilidad hasta el pago.

Al respecto debe indicarse que dentro de la legislación laboral y de la seguridad social, si bien se ha establecido el reconocimiento de intereses comerciales, ello en los artículos 23 de la Ley 100 de 1993 (referente al pago tardío de las cotizaciones al sistema), el artículo 141 de la misma ley 100 de 1993 (pago tardío de mesadas pensionales), o el artículo 65 del C.S.T (pago tardío de salarios y prestaciones sociales), dichas normas son precisas al indicar los casos que gobiernan, sin que quede abierto a interpretaciones su posible extensión a casos distintos a los allí regulados.

En relación con este asunto existe pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3449 de 2016, en la que se señaló lo siguiente:

“Planteado así el asunto, desde ya se advierte que le asiste razón al recurrente cuando afirma que los intereses legales previstos en el art. 1617 del C.C. no son procedentes frente a acreencias de índole laboral, pues los mismos operan para créditos de carácter civil, tal y como lo sostuvo esta Sala de la Corte en sentencia CSJ SL, 21 nov. 2001. rad. 16476, cuando al referirse a la norma en comento sostuvo:

De tal manera que la disposición transcrita consagra un régimen resarcitorio específico que gobierna las consecuencias del incumplimiento de obligaciones pecuniarias civiles de stirpe contractual, consistentes en el pago de sumas de dinero determinadas, conforme al cual acreditado en juicio el retardo del deudor, proceden ipso jure, a menos que las partes hayan estipulado un interés superior, como mínimo, a título indemnizatorio los referidos intereses moratorios, avaluados por el propio legislador quien los presume de derecho y cuantifica. Lo anterior comprende, como atrás se dijo, el lucro cesante, esto es, la ganancia o provecho que deja de reportarse. Pero como es menester contemplar las consecuencias de una economía inflacionaria, pues de lo contrario se llegaría al establecimiento de tasas negativas, debe agregarse la respectiva corrección monetaria”

Tesis reiterada en sentencias SL20721-2017, Radicación N° 55296 del 6 de diciembre 2017 y SL4849-2019, Radicación n.º 62648 del 22 de octubre de 2019.

Importante es precisar que la legislación del trabajo ningún vacío presenta en cuanto a los intereses aplicables a deudas de carácter laboral, y, en esa medida, no hay lugar a la aplicación analógica de normas propias del Código Civil.

Así, conforme a la jurisprudencia citada, concluye esta Sala que los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil, solo operan en los procesos ejecutivos de carácter civil y no en los ejecutivos de índole laboral, en razón al origen de la obligación.

Ahora, se reitera que los artículos 100 del CPT y de la S.S. y 422 del CGP, le exigen al Juez de la ejecución tener certeza sobre la existencia del título ejecutivo, sin que haya duda que este contenga una obligación expresa, clara y exigible. Y si en el trámite del juicio se evidencian hechos que desvirtúen la ejecución, debe declararlo de oficio, conforme a la facultad de revisión otorgada por el artículo 132 del Código General del Proceso.

Por lo anterior, se **CONFIRMARÁ** la decisión recurrida, en cuanto se negó el mandamiento de pago o su ejecución sobre los intereses del artículo 1617 sobre el valor de las condenas impuestas en el proceso ordinario. En lo demás queda incólume la decisión al no haber sido objeto de recurso.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el Auto proferido por el Juzgado décimo Laboral del Circuito de Medellín 26 de julio de 2023, dentro del Proceso Ejecutivo Laboral promovido por la señora **PAULA ANDREA VELARDE JARAMILLO** en contra de **FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACIÓN CONCIVICA - FUNDACIÓN COLOMBIA CIVICA**, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
No 174 del 12 de octubre de 2023.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala>

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **4b9d8f189028a9e421ff4638e00c91f0e5eeb562e306e75181b16dc5cc28f585**

Documento generado en 11/10/2023 02:58:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>